



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2017-00393
PROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
CONVOCANTE: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
CONVOCADO: OLGA VIVIANA GOMEZ MOYA

La Procuraduría 55 Judicial I para asuntos administrativos, remitió solicitud de aprobación o improbación de la conciliación extrajudicial, celebrada entre el apoderado judicial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y doctora OLGA VIVIANA GOMEZ MOYA quien actúa en causa propia, según acta calendada 03 de noviembre de 2017, celebrada dentro de la Conciliación Extrajudicial No. 91926, donde se decidió conciliar la inclusión de la reserva especial de ahorro como factor salarial para liquidar la prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos devengados por la convocada.

Por lo anterior y con el fin de cumplir la función encomendada al Juez Administrativo en el artículo 24 de la Ley 640 de 2001, es pertinente **AVOCAR Y DECIDIR LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL**, como sigue a continuación.

I. PARÁMETROS DEL ACUERDO CONCILIATORIO

i. La entidad convocada, propuso conciliar la inclusión de la reserva especial del ahorro como factor salarial para liquidar la prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos devengados por la señora OLGA VIVIANA GOMEZ MOYA por un monto total de \$200.000.000.

CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$2.406.494,00).

ii. Respecto de la indexación, junto con los intereses de la suma antes plasmada, se concilió no habiendo lugar al pago, por cuanto la convocada desistió de los mismos.

iii. La parte convocada desiste de cualquier acción legal en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, basada en los mismos hechos que dieron origen a la audiencia de conciliación, es decir, a la reliquidación de la prima de dependientes en los periodos comprendidos en la conciliación.

iv. El valor a cancelar corresponde al dinero dejado de percibir por la exclusión de la reserva especial del ahorro en los emolumentos antes citados, desde el 30 de mayo de 2014 hasta el 30 de mayo de 2017.

v. Las sumas reconocidas serán canceladas dentro de los 70 días siguientes a la radicación de la solicitud de pago.

La señora OLGA VIVIANA GOMEZ MOYA, actuando en causa propia, manifestó estar de acuerdo en su totalidad con la oferta conciliatoria realizada por la entidad convocante, mediante Certificación del 30 de octubre de 2017, expedida por el Secretario Técnico del Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio.

II. PRUEBAS

Con las pruebas documentales allegadas, se demostraron los siguientes hechos:

a. La señora Olga Viviana Gomez Moya, ha prestado sus servicios a la Superintendencia de Industria y Comercio desde el 21 de enero de 2009, ocupando actualmente el cargo de Profesional Universitario 2044-07 (Prov), del Grupo de Trabajo de Vía Gubernativa, asignada en el Grupo de Talento Humano adscrito a la Secretaria General (fl. 24).

- b.** Por medio de derecho de petición elevado el 30 de mayo de 2017, la señora Olga Viviana Gomez Moya, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el reconocimiento y pago de las diferencias generadas en la prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos, por el no computo de la reserva especial del ahorro dentro de los mismos (fls. 11-13).
- c.** En respuesta a lo anterior, a través de oficio fechado 09 de junio de 2017, con radicado 17-139008-2-0, la Superintendencia de Industria y Comercio le informó a la señora Olga Viviana Gomez Moya, la decisión de conciliar lo relacionado con el reajuste de la prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos, incluyendo la reserva especial del ahorro como factor de liquidación. Dentro del mismo oficio se le informó al peticionario los restantes parámetros de la conciliación (fl. 14-15).
- d.** En atención a lo anterior, la señora Olga Viviana Gomez Moya, radicó respuesta ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el día 16 de junio de 2017, aceptando la propuesta de adelantar los trámites pertinentes para realizar la conciliación, previo conocimiento de la liquidación efectuada por la entidad (fl. 16).
- e.** Posteriormente, con oficio fechado 30 de junio de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio le remitió a la señora Olga Viviana Gomez Moya, la liquidación de los factores a conciliar (fls. 17-19), siendo dichos montos aceptados por la convocada a través de oficio radicado el 25 de julio del mismo año (fl. 22).

III. CONSIDERACIONES

El artículo 24 de la Ley 640 de 2001, enuncia que las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia contenciosa administrativa se remitirán dentro de los tres días siguientes al "*Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que le imparta su aprobación o improbación*".

Por su parte, mediante la expedición del Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Decreto 1000 de 2015...

los asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa y su artículo 2.2.4.3.1.1.2., estableció lo siguiente:

“Artículo 2.2.4.3.1.1.2. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control previstos en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:

- Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.
- Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.
- Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.

Parágrafo 2°. El conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.

Parágrafo 3°. Cuando el medio de control que eventualmente se llegare a interponer fuere la de nulidad y restablecimiento de derecho, la conciliación extrajudicial sólo tendrá lugar cuando no procedan recursos en vía gubernativa o cuando esta estuviere debidamente agotada, lo cual deberá acreditarse, en legal forma, ante el conciliador.

Parágrafo 4°. En el agotamiento del requisito de procedibilidad del medio de control de qué trata el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se entenderá incluida de repetición consagrada en el inciso tercero de dicho artículo.

Parágrafo 5°. El agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad, no será necesario para efectos de acudir ante tribunales de arbitramento encargados de resolver controversias derivadas de contratos estatales.”

En este sentido, si bien es cierto que la conciliación prejudicial en materia administrativa es una de las vías más rápidas y no litigiosas para la solución de conflictos, no es menos cierto que debe cumplir con las exigencias requeridas dentro del marco de la Constitución Política, las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1285 de 2009, para su consecuente aprobación.

Así, tenemos que los requisitos para la aprobación del acuerdo extrajudicial, tal como lo señaló la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia del 18 de julio de 2007, Rad .1998-00249-0 1(28106) con ponencia de la Doctora Ruth Stella Correa Palacio, son los siguientes:

- “1. Que no haya operado el fenómeno de la caducidad (art. 61 ley 23 de 1991, modificado por el arto 81 ley 446 de 1998).*
- 2. Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (art. 59 ley 23 de 1991 y 70 ley 446 de 1998).*
- 3. Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar.*
- 4. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea **violatorio de la ley** o no resulte lesivo para el patrimonio público (art. 65 A ley 23 de 1991 y arto 73 ley 446 de 1998).”*

Dichos requisitos deben concurrir simultáneamente, porque al faltar uno de ellos, la conciliación debe ser improbadada.

Acorde a los lineamientos expresados, **EL DESPACHO APROBARÁ LA PRESENTE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL** por los siguientes motivos:

1. No ha operado el fenómeno de la caducidad.

El asunto materia de conciliación es susceptible de reclamarse judicialmente a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), pues se trata del reconocimiento a la señora Olga Viviana Gomez Moya, de la diferencia causada por la no inclusión de la denominada reserva especial del ahorro como parte integrante de la asignación básica para la liquidación de la prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos, en su calidad de empleado público de la Superintendencia de Industria y Comercio, por el periodo comprendido entre el **30 de mayo de 2014 y 30 de mayo de 2017**.

Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio fue quien adelantó el trámite de la conciliación, habida consideración que en sesión del Comité de Conciliación de la entidad llevado a cabo el 3 de marzo de 2011, se adoptó este criterio conciliatorio de manera general, con el objeto de proceder a la reliquidación y pago de los dineros dejados de pagar a los funcionarios, por la

exclusión de la reserva especial del ahorro en la liquidación de, entre otros, la prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos.

De acuerdo con lo anterior, la conciliación adelantada conforme a los medios de prueba allegados al plenario, surtió sus efectos por el periodo comprendido entre el **30 de mayo de 2014 y 30 de mayo de 2017**, por haberse presentado la solicitud de reconocimiento en esta última fecha, ello por cuanto se omitió la inclusión de la reserva especial de ahorro dentro de la asignación básica y la consecuencial liquidación de la prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos.

En este sentido, la convocada tiene derecho al reajuste de estos factores en razón de su vínculo laboral con la Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en cuenta que no fueron considerados dentro de la liquidación de los mismos en su momento, y aunado a ello, por cuanto para el momento de presentación de la conciliación, la señora Olga Viviana Gomez Moya se encontraba vinculada a la entidad.

Así las cosas, al no haberse reconocido los valores del reajuste por omitir la reserva especial del ahorro en la prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos, a la señora **Olga Viviana Gomez Moya** en el periodo comprendido entre el **30 de mayo 2014 y 30 de mayo de 2017**, es claro que el medio de control correspondiente no se encontraba caducado y respeta el criterio de prescripción en torno a los derechos laborales que es de tres años contados a partir de que se hizo exigible el derecho a reclamar.

2. El acuerdo versa sobre derechos económicos disponibles.

Se observa que el reclamo se refiere de manera concreta al pago de los valores adeudados por concepto de la omisión de la inclusión de la reserva especial del ahorro en la asignación básica para la posterior liquidación de la prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos, para el periodo comprendido entre **mayo de 2014 y mayo de 2017**, siendo un asunto que si bien constriñe derechos laborales ciertos e indiscutibles, son de connotación económica, por lo que son susceptibles de transacción bajo tales condiciones, máxime cuando de lo pretendido y del acuerdo se verifica que la convocada

tiene derecho a la prestación reclamada, pues así se desprende de la fórmula conciliatoria presentada por la Superintendencia Industria y Comercio.

3. Las partes están debidamente representadas.

La parte convocante actúa mediante apoderado con facultades para conciliar, conforme al poder visible a folio 6 del expediente.

De igual manera, la señora **Olga Viviana Gomez Moya**, actúa en causa propia conforme lo manifestó en escrito radicado con No. 17-139008-00006-0000, el cual obra a folio visible 22 del expediente.

4. El acuerdo no viola la ley, cuenta con las pruebas necesarias y no afecta el patrimonio público.

Conforme se desprende de la información allegada a la actuación, la señora Olga Viviana Gomez Moya reclamó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el reconocimiento y pago de los valores adeudados por concepto de la diferencia causada por la omisión de la inclusión de la reserva especial del ahorro en la asignación básica para la liquidación de la prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos, emolumentos por ella percibidos.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en providencia calendada el 10 de mayo de 2001, al desatar la consulta presentada por el entonces Superintendente de Sociedades, en el sentido de establecer la viabilidad del reconocimiento de la prima de servicio y la prima semestral de forma simultánea para los empleados de esa entidad pública, realizó un recuento histórico de la evolución de la Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades Corporanónimas, bajo un criterio temporal en el cual se definió igualmente la titularidad del reconocimiento de algunas prestaciones económicas a favor de los trabajadores y empleados de la entidad. La Corporación en su momento expresó:

“1. La Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades – Corporanónimas. Por ser de interés para la consulta, deben destacarse los siguientes puntos en el desarrollo de la actividad de Corporanónimas:

1) La resolución 97 de 1946 del Ministerio de Gobierno reconoció la personería jurídica a la Corporación de Empleados de la Superintendencia de Sociedades Anónimas.

2) Esta superintendencia había sido creada por la ley 58 de 1931 y su régimen presupuestal fue fijado por el decreto 142 de 1951, cuyo artículo 6° dispuso que las prestaciones sociales de sus empleados serían atendidas por la corporación.

3) La resolución 7333 de 1977 del Ministerio de Justicia aprobó los estatutos de la corporación y le autorizó el uso del acrónimo "Corporanónimas".

4) La corporación pasó a llamarse Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades -Corporanónimas- y luego fue reestructurada en la llamada "modernización del Estado", mediante el decreto con fuerza de ley 2156 de 1992, el cual determinó que "es un establecimiento público, del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico" (art. 1°) y la calificó de entidad de previsión social, al establecer su objeto en el artículo 2° en los siguientes términos:

"La Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades, CORPORANONIMAS, como entidad de previsión social, tendrá a su cargo el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, económicas y médico asistenciales consagradas en las normas vigentes para los empleados públicos de las Superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades, de Valores, de la misma Corporación, en la forma que dispongan sus estatutos y reglamentos internos, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias".

En desarrollo de este objeto, el artículo 3° del mismo decreto enumeró las funciones de la corporación, dentro de las cuales conviene resaltar las dos primeras, a saber:

1. Organizar, dirigir y administrar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, económicas y médico asistenciales de los empleados públicos de las Superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades, de Valores y de la misma Corporación.

2. Atender las prestaciones a que se obligue en favor de sus afiliados, beneficiarios, pensionados y adscritos especiales.

5) El decreto ley 1695 del 27 de junio de 1997 dispuso la supresión de Corporanónimas y ordenó su liquidación. En el artículo 12 le asignó a las respectivas superintendencias el pago de los beneficios económicos que ella tenía a su cargo. Este artículo establece lo siguiente:

"Pago de beneficios económicos.- El pago de los beneficios económicos del régimen especial de prestaciones económicas de los empleados de las superintendencias afiliadas a Corporanónimas, contenido en los decretos 2739 de 1991, 2156 de 1992, 2621 de 1993, 1080 de 1996 y el acuerdo 040 de 1991 de la Junta Directiva de Corporanónimas, en adelante estará a cargo de dichas superintendencias, respecto de sus empleados, para lo cual en cada vigencia fiscal se apropiarán las partidas presupuestales necesarias en cada una de ellas, en los mismos términos establecidos en las disposiciones mencionadas en el presente artículo"

Como se advierte, los beneficios económicos contemplados en el acuerdo 040 de 1991 de la Junta Directiva de Corporanónimas, entre los que se cuentan la prima de actividad anual, llamada anteriormente prima por año de servicio, y la prima semestral que favorecían a los empleados públicos de la Superintendencia de Sociedades quedaron "legalizados" con esta norma de rango legal y mantienen su vigencia."

De conformidad con lo expuesto, es claro que la Superintendencia de Industria y Comercio, asumió el reconocimiento de las prestaciones económicas contenidas en el Acuerdo 040 de 1991, por el cual se establece el reglamento general de servicios.

Al desarrollar el capítulo de las prestaciones económicas, en el artículo 58 del Acuerdo 040 de 1991, se consagró la reserva especial del ahorro, con el siguiente alcance:

"Artículo 58. Contribución al fondo de empleados. Reserva especial del ahorro. *Corporanónimas contribuirá con sus aportes al Fondo de empleados de la Superintendencia de Sociedades y Corporanónimas, entidad con personería jurídica reconocida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Para tal fin pagará mensualmente a sus afiliados forzosos una suma equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del sueldo básico, prima de antigüedad, prima técnica, y gastos de representación; de este porcentaje entregará Corporanónimas directamente al Fondo el quince por ciento (15%), previa deducción de la cotización que sea del caso por concepto de la afiliación de los beneficiarios. Los afiliados forzosos contribuirán mensualmente al Fondo con el cinco por ciento (5%) de las asignaciones básicas mensuales fijadas por la ley."*

Adicionalmente dicho Acuerdo, determinó que Corporanónimas reconociera y pagaría las primas y demás reconocimientos determinados por la ley.

En lo que respecta a la reserva especial del ahorro, el Consejo de Estado ha determinado que dicho emolumento constituye factor salarial y así fue concebido desde el primer pronunciamiento judicial que sobre el particular hizo la Corporación de cierre de lo Contencioso Administrativo, bajo los siguientes argumentos:

"De lo expuesto se infiere que los empleados de la Superintendencia de Sociedades, mensualmente, devengaban la asignación básica que cancelaba la Superintendencia en forma directa y un 65% de ésta, pagado por CORPORANOMINAS.

Como lo ha planteado la Corporación en numerosas oportunidades, tal como lo precisa el artículo 127 del C.S.T. "Constituye salario no solo la remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie y que implique retribución de servicios, sea cualquiera la denominación que se adopte..."

Significa lo anterior que no obstante el 65% del salario se haya denominado reserva especial de ahorro, como no se ha probado que el pago de esta suma tenga causa distinta a la del servicio que presta el funcionario e indudablemente es factor salarial. "forzoso es concluir que se trata de salario y no de una prestación social a título de complemento para satisfacer las necesidades del empleado o su familia; es decir, forma parte de la asignación mensual que devengaba la actora", como se sostuvo en la aludida providencia del 31 de julio de 1997.

En consecuencia, constituyendo salario ese 65% pagado mensualmente al funcionario por CORPORANOMINAS, ha debido tenerse en cuenta para liquidarle la bonificación, ya que equivale a asignación básica mensual.

No de otra manera debe entenderse dicho pago, pues de no ser así, significaría que se está recibiendo a título de mera liberalidad y ello no puede efectuarse con fondos del tesoro público.

Considera la Sala que la circunstancia de que ese porcentaje de la asignación básica fuera cancelado por "CORPORANOMINAS", entidad diferente de la Superintendencia de Sociedades, no constituye un obstáculo legal para su inclusión en la liquidación de la bonificación, ya que las mismas disposiciones que establecieron que el salario de los funcionarios de la Superintendencia estuviera a cargo de dos entidades diferentes, permiten también esa liquidación. No tendría razón de ser que fuera legal el pago mensual del salario en dicha forma e ilegal el tomar la asignación mensual básica completa para efectos de la bonificación por retiro."²

Por consiguiente, la liquidación de la reserva especial del ahorro como parte de la asignación básica en razón a su naturaleza salarial, es uno de aquellos elementos que retribuye directamente la prestación del servicio y en el entendido que los artículos 44 del Acuerdo 040 de 1991 y 144 del Decreto 708 de 2009 al fijar la cuantía con fundamento en la asignación básica no excluyan la reserva especial del ahorro, dicha circunstancia ratifica la viabilidad del acuerdo conciliatorio suscrito por la señora **Olga Viviana Gomez Moya** y la **Superintendencia de Industria y Comercio**.

Ahora bien, frente a las calidades particulares la convocada, se tiene que actualmente labora en la Superintendencia de Industria y Comercio ubicada geográficamente en la ciudad de Bogotá, ello desde el 21 de enero de 2009, hasta la fecha y que ostenta la calidad de servidor público desempeñándose en el cargo de de Profesional Universitario 2044-07 (Prov), del Grupo de

Trabajo de Vía Gubernativa, asignada en el Grupo de Talento Humano adscrito a la Secretaría General (fl. 24).

Que el 30 de mayo de 2017, solicitó a la entidad pública el reconocimiento y pago de la reserva especial del ahorro en la liquidación de la asignación básica para la posterior liquidación de la prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos (fls. 11-13).

Conforme a lo anterior, la liquidación que soportó la diferencia entre los valores pagados y los que efectivamente se debieron reconocer al actor se encuentra a folios 18 a 19 del plenario.

Ahora bien, en diligencia celebrada el 30 de octubre de 2017, ante la Procuraduría 55 Judicial II para Asuntos Administrativos, una vez revisado el acuerdo conciliatorio, se observó un error de digitación en cuanto al periodo correspondiente a la liquidación efectuada para efectos de la inclusión de la reserva especial del ahorro en los emolumentos solicitados por la convocada, por lo que obra a folio 35 del plenario, Certificación del 30 de octubre de 2017 suscrita por la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual corrige el defecto antes señalado.

De lo anterior, se tiene que la liquidación corresponde al periodo comprendido entre el 30 de mayo de 2014 y 30 de mayo de 2017, lo cual no alteró el monto arrojado inicialmente, toda vez que los emolumentos que se reliquidaron en el año 2014 con la inclusión de la reserva especial del ahorro, fueron devengados para dicha anualidad en los meses de junio de 2014 para la prima de actividad y bonificación por recreación y en el mes de septiembre de 2015 para los viáticos (fls.36-37). Aunado a ello, por expresa manifestación, la señora Olga Viviana Gomez Moya estuvo de acuerdo con la corrección del error de digitación antes referido.

En este sentido, en la Certificación expedida por la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio, calendada 30 de octubre de 2017, se señalaron los valores totales objeto de conciliación, tratándose de la suma de los valores de los emolumentos devengados y pagados, así como de los valores de los emolumentos no devengados y pagados, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO PÚBLICO	PERIODO QUE COMPRENDE MONTO TOTAL POR CONCILIAR
OLGA VIVIANA GOMEZ MOYA	30/05/2014 al 30/05/2017 \$2.406.494

En lo que respecta a las condiciones en las cuales se cumplirá la obligación contenida en el acuerdo conciliatorio, se tiene que el Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio, determinó las condiciones generales de las controversias suscitadas en la reliquidación de las asignaciones básicas con inclusión de la reserva especial del ahorro, concretándose en los siguientes lineamientos:

1.- CONCILIAR la re liquidación de las prestaciones sociales: PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN Y VIÁTICOS, teniendo en cuenta para ello, la RESERVA ESPECIAL DE AHORRO, lo anterior, en los siguientes términos:

1. *Que los convocados desistan de los intereses e indexación correspondientes a la prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos.*
2. *Que los convocados desistan de cualquier acción legal en contra de la SIC basada en los mismos hechos que dieron origen a la audiencia de conciliación, es decir a la re liquidación de prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos, en los periodos comprendidos en la presente conciliación de acuerdo a las liquidaciones adjuntas.*
3. *Que la SIC reconocerá a los convocados el valor correspondiente a los dineros dejados de percibir por la exclusión de la Reserva Especial del Ahorro, en los últimos tres años, al momento de liquidar: prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos, conforme a los valores obrantes en las liquidaciones que han sido puestas previamente a consideración de los convocados y los valores obrantes en los antecedentes del presente análisis.*
4. *Que en el evento que se concilie, la Superintendencia de Industria y Comercio pagará los factores reconocidos en la presente audiencia de conciliación, dentro de los setenta (70) días siguientes a que la entidad cuente con toda la documentación necesaria para adelantar el trámite requerido.²³*

En consecuencia, es procedente que la entidad realice el pago de los valores adeudados a la servidora pública por concepto de la diferencia causada en la omisión de la inclusión de la reserva especial del ahorro como parte integrante de la asignación básica para la posterior liquidación de la prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos, pues como ha quedado evidenciado la convocada tiene derecho a dicho reconocimiento y la entidad realizó las operaciones relacionadas con el recalcular para efectos prestacionales para el periodo comprendido entre el **30 de mayo de 2014 y**

el 30 de mayo de 2017, y en ese sentido el Despacho considera que lo reclamado tiene el sustento legal y jurisprudencial apropiado, es decir, es ajustado al ordenamiento jurídico.

Conforme a ello, se observa que en la liquidación efectuada por la entidad, en efecto se reconocen los valores adeudados por concepto de la diferencia causada en los factores denominados prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos que se causaron en el periodo mayo de 2014 a mayo de 2017, toda vez que luego de realizar por parte del Despacho las operaciones matemáticas correspondientes, en aplicación de las disposiciones normativas que crearon los emolumentos antes señalados y del Decreto 1063 de 2015, el cual regula lo concerniente a los viáticos, se determinó que la diferencia a la que tiene derecho es exactamente la reconocida por la convocante.

Así las cosas, se tiene que el acuerdo no es lesivo a los intereses y el patrimonio de la Superintendencia de Industria y Comercio, ni del convocado, toda vez que se concilió por el valor adeudado.

En tal virtud, el presente acuerdo no vulnera el ordenamiento jurídico, cuenta con las pruebas necesarias y no es lesivo a los intereses y patrimonio de la entidad pública, al tratarse del reclamo de unos derechos laborales causados conforme a derecho.

5. Orden de conciliar por parte del Comité de Conciliación.

Según se observa a folio 35 del expediente, el Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió conciliar el presente asunto, a favor la señora **Olga Viviana Gomez Moya**, por la suma de **dos millones cuatrocientos seis mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos mcte (\$2.406.494,00)**.

Lo anteriormente expuesto permite a esta Jurisdicción, conforme a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 65A de la Ley 23 de 1991, aprobar la conciliación extrajudicial suscrita ante la Procuraduría 55 Judicial II para Asuntos Administrativos el día 03 de noviembre de 2017.

razón a que el acuerdo conciliatorio se fundó en un objeto y causa lícitos, sin vicios en el consentimiento de las partes, y sin que con él se lesionen los intereses del Estado, o afecte el patrimonio económico del ente público en lo que fue materia de conciliación, pues se trata de efectuar el pago de unos valores adeudados a un servidor público de la rama ejecutiva del poder público.

En relación al plazo para efectuar el pago, se determinó que el mismo se realizaría dentro de los setenta (70) días hábiles siguientes a la incorporación de la integridad de los documentos necesarios para tal fin.

En virtud de lo expresado, el Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda,

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL celebrada el 03 de noviembre de 2017, dentro del expediente radicado con el número 91926 de 14 de septiembre de 2017, suscrita entre la señora Olga Viviana Gomez Moya y el mandatario judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, ante la Procuraduría 55 Judicial II delegada para Asuntos Administrativos.

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los numerales 2º y 3º del artículo 114 del Código General del Proceso, aplicable a esta jurisdicción por remisión del art. 306 del C.P.A.C.A., la Secretaría expedirá copia de este proveído con sus respectivos anexos, la cual prestará mérito ejecutivo en los términos del art. 2.2.4.3.1.1.13., del Decreto Único 1069 de 2015.

Para tal efecto, la parte interesada deberá consignar el valor de la certificación que asciende a la suma de seis mil pesos (\$6.000) en la cuenta del Arancel Judicial de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial No. 3-0820-000636-3 del Banco Agrario de Colombia y aportar el desprendible a través de memorial. Igualmente, la parte interesada deberá tomar las copias que requiera a su cargo, y aportar al expediente las mismas igualmente con memorial. Luego de lo cual serán entregadas por Secretaría.

TERCERO.- Una vez cumplido lo ordenado en el numeral anterior, archívese el expediente.

